



Bogotá, siete (07) de julio de dos mil veintidós (2022).

REFERENCIA

EXPEDIENTE: 11001 33 35 010 2022 00096 00

ACCIONANTE: YENNY PAOLA SÁNCHEZ VARGAS en calidad de agente oficioso de la señora MARIA DEL CARMEN FRISNEDA DE SÁNCHEZ.

ACCIONADOS: MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL FIDUAGRARIA S. A.

VINCULADOS: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – MINISTERIO DEL TRABAJO - ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO - ALCALDÍA LOCAL DE FONTIBÓN.

CLASE: ACCIÓN DE TUTELA

Procede el Despacho a tomar la determinación que en derecho corresponda, dentro del trámite de verificación de cumplimiento de fallo de tutela, promovido por **YENNY PAOLA SÁNCHEZ VARGAS** en calidad de agente oficioso de la señora **MARIA DEL CARMEN FRISNEDA DE SÁNCHEZ** contra el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL** y a la **ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ**, conforme a las manifestaciones hasta ahora vertidas en la actuación por las partes.

I. SITUACIÓN FÁCTICA

Mediante fallo de tutela del 8 de abril de 2022, este Juzgado amparó los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas de **MARIA DEL CARMEN FRISNEDA DE SÁNCHEZ**. En consecuencia, ordenó al **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL** y a la **ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ**, para que adelantaran de forma coordinada, las gestiones a que haya lugar para reactivar la inclusión de la actora como beneficiaria del Programa Colombia Mayor, de manera que haga parte de la nómina correspondiente, así como el pago de los subsidios dejados de entregar desde el mes de septiembre del año 2021.

El 01 de junio de 2022, mediante mensaje electrónico remitido al buzón de correo institucional del estrado, la Coordinadora del Grupo Interno de Trabajo de Acciones Constitucionales y Procedimientos Administrativos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – PROSPERIDAD SOCIAL-, informó que una vez consultado en el Sistema de Información Colombia Mayor, se encontró reflejado el pago realizado el 30 de abril 2022 a la accionante por valor de \$1.165.000, correspondiente a la reliquidación de los Giros pendientes, que se ven reflejados en el Ciclo 4-2022 (Giros acumulados), y de igual manera, ya reposa el pago del Ciclo 5-2022, por valor de \$130.000, disponible para cobro.



Para resolver se **CONSIDERA:**

El Decreto 2591 de 1991 “*Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política*”, en su artículo 27 dispone que una vez que se profiera el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable de la amenaza o vulneración de los derechos constitucionales fundamentales debe cumplirlo sin demora, y que si no lo hace dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior de aquél y lo requerirá para que lo haga cumplir y le inicie el correspondiente procedimiento disciplinario, so pena que si no procede en esa forma también se abra proceso contra dicho superior.

Igualmente, la norma en cita establece que el juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan la sentencia y que, en todo caso, aquél establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá competencia hasta que quede restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.

Por su parte, el artículo 52 *ibidem* señala que quien incumpla una orden de tutela, incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis (6) meses y multa hasta de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales, sanción que impondrá el juez que dictó la decisión mediante trámite incidental y que deben ser consultadas ante el superior jerárquico de aquél, quien decidirá si las revoca o no.

La Corte Constitucional al referirse a la facultad del juez para sancionar por desacato a quien incumple una orden de tutela, precisó:

“(…) se puede deducir que la finalidad del incidente de desacato no es la imposición de la sanción en sí misma, sino la sanción como una de las formas de búsqueda del cumplimiento de la sentencia. Al ser así, el accionante que inicia el incidente de desacato se ve afectado con las resultas del incidente puesto que éste es un medio para que se cumpla el fallo que lo favoreció.

Segundo, la imposición o no de una sanción dentro del incidente puede implicar que el accionado se persuada o no del cumplimiento de una sentencia. En efecto, en caso de que se inicie el incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se ha desacatado lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanción, deberá acatar la sentencia.

En caso de que se haya adelantado todo el trámite y resuelto sancionar por desacato, para que la sanción no se haga efectiva, el renuente a cumplir podrá evitar ser sancionado acatando. Al contrario, si el accionado no acepta la existencia de desacato y el juez, por incorrecta apreciación fáctica, determina que éste no existió, se desdibujará uno de los medios de persuasión con el que contaba el accionado para que se respetara su derecho fundamental. Al tener un carácter persuasivo, el incidente de desacato sí puede influir en la efectiva protección de los derechos fundamentales del accionante y en esa medida existiría legitimación para pedir la garantía del debido proceso a través de tutela”¹

La jurisprudencia, al referirse a la facultad del juez para sancionar por desacato a

¹ Corte Constitucional, Sentencia T-509 de 2013, MP: Nilson Pinilla Pinilla



quien incumple un fallo de tutela, señaló que al ser esta potestad es una manifestación del poder disciplinario del juez, la responsabilidad de quien incurra en él es subjetiva, queriendo decir que no puede presumirse la responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento sino que para que haya lugar a imponer la sanción se requiere comprobar la negligencia de la persona comprometida, sobre el particular, consideró:

“(...) 30.- Así mismo, el juez de tutela al tramitar el respectivo incidente tiene el deber constitucional de indagar por la presencia de elementos que van dirigidos a demostrar la responsabilidad subjetiva de quien incurre en desacato, por tanto dentro del proceso debe aparecer probada la negligencia de la persona que desconoció el referido fallo, lo cual conlleva a que no pueda presumirse la responsabilidad por el sólo hecho del incumplimiento. De acuerdo con ello, el juzgador tiene la obligación de determinar a partir de la verificación de la existencia de responsabilidad subjetiva del accionado cuál debe ser la sanción adecuada – proporcionada y razonable – a los hechos².’

31.- De acuerdo con las anteriores consideraciones se tiene que, al ser el desacato un mecanismo de coerción que surge en virtud de las facultades disciplinaria de los jueces a partir de las cuales pueden imponer sanciones consistentes en multas o arresto, éstas tienen que seguir los principios del derecho sancionador. En este orden de ideas, siempre será necesario demostrar que el incumplimiento de la orden fue producto de la existencia de responsabilidad subjetiva por parte del accionado, es decir, debe haber negligencia comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo, quedando eliminada la presunción de la responsabilidad por el sólo hecho del incumplimiento.

32.- En este punto cabe recordar que, la mera adecuación de la conducta del accionado con base en la simple y elemental relación de causalidad material conlleva a la utilización del concepto de responsabilidad objetiva, la cual está prohibida por la Constitución y la Ley en materia sancionatoria. Esto quiere decir que entre el comportamiento del demandado y el resultado siempre debe mediar un nexo causal sustentado en la culpa o el dolo.”³ (Subrayas fuera de texto).

Así las cosas, el juez del desacato debe verificar si efectivamente se incumplió la orden de tutela impartida y, de ser así, tiene que determinar si el mismo fue total o parcial, identificando las razones por las cuales se produjo, con el fin de establecer las medidas necesarias para proteger efectivamente el derecho y si existió responsabilidad subjetiva de la persona obligada.

Caso concreto

El caso que nos ocupa se enmarca en que las accionadas adelanten de forma coordinada, las gestiones a que haya lugar para reactivar la inclusión de la señora MARIA DEL CARMEN FRISNEDA DE SÁNCHEZ como beneficiaria del Programa Colombia Mayor, de manera que haga parte de la nómina correspondiente. Así como el pago de los subsidios dejados de entregar desde el mes de septiembre del año 2021.

² Cfr. Sentencia T-1113 de 2005.

³ Sentencia T-171 de 2009.



En esta oportunidad, la judicatura encuentra que con los documentos aportados por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL se tiene por cumplido el fallo de tutela dictado por este operador judicial. Nótese que se acreditó el pago de la reliquidación de los giros pendientes por concepto del programa Colombia Mayor e igualmente reposa el pago del ciclo 5-2022 por valor de 130.000, es decir se acató la orden judicial de manera oportuna y completa y la parte accionante es conocedora de las actuaciones realizadas por la accionada en aras de dar cumplimiento al fallo dictado por este estrado judicial, toda vez que ya ha materializado el cobro de los dineros por concepto del subsidio del que es beneficiaria.

El presente auto deberá ser comunicado por el medio más expedito a las partes atendiendo que contra el mismo no procede recurso alguno como bien lo ha señalado la jurisprudencia nacional; pues en materia de incidentes de desacato solo procede la consulta ante el superior jerárquico en los casos de imponerse sanción; sin embargo, como quiera que en el presente asunto no se sanciona, se entiende que no procede recurso alguno con la decisión.

La correcta interpretación y alcance del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, parcialmente demandado de inexecuibilidad, no puede ser otro que el que se deduce de su tenor literal y del sentido natural y obvio de sus palabras: es decir, consagra un trámite incidental especial, que concluye con un auto que nunca es susceptible del recurso de apelación, pero que si dicho auto es sancionatorio, debe ser objeto del grado de jurisdicción llamado consulta (...)⁴

En mérito de lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE

- 1.- ABSTENERSE de iniciar el trámite incidental.
- 2.- COMUNÍQUESE la presente decisión a la parte accionante.
- 3.- Una vez sea devuelto el trámite de tutela de la Corte Constitucional, excluido de revisión, se procederá a efectuar el archivo del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

AUGUSTO LLANOS RUIZ
JUEZ

Jado

⁴ CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 243 de treinta (30) de mayo de mil novecientos noventa y seis (1996). Mg. Ponente. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

Firmado Por:

Augusto Llanos Ruiz
Juez Circuito
Juzgado Administrativo
010
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **44330c53c1509b61edd395705cdae120ab5a98a89811c12cde33ac02b023a2eb**

Documento generado en 07/07/2022 01:11:44 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: <https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>